

## **CAPÍTULO I LA PLURALIDAD DE LOS CAMPOS SOCIOJURÍDICOS**

El Estado-nación ha sido la dimensión espacio-temporal más importante del derecho durante los últimos doscientos años, particularmente en los países centrales del sistema mundial. Sin embargo, su importancia fue posible sólo porque las otras dos dimensiones espacio-temporales, la local y la transnacional, fueron declaradas inexistentes formalmente por la teoría política liberal hegemónica. En este libro me concentro en las dimensiones espacio-temporales locales y transnacionales o globales, y en sus interrelaciones con el espacio y el tiempo estatales; dentro de esta tarea, presto especial atención al espacio y al tiempo globales.

Mi propósito es mostrar: (a) que el campo jurídico en las sociedades contemporáneas y en el sistema mundial como un todo es un paisaje mucho más rico y complejo que aquel que ha asumido la teoría política liberal; (b) que ese campo jurídico es una constelación de legalidades (e ilegalidades) diversas, que operan en espacios y tiempos locales, nacionales y transnacionales, y, finalmente, (c) que si se concibe de esta forma, el derecho tiene tanto un potencial regulatorio o incluso represivo, como un potencial emancipatorio. La forma en que el potencial del derecho evoluciona, ya sea hacia la

regulación o la emancipación, no tiene nada que ver con la autonomía o autorreflexividad del derecho sino con la movilización política y las fuerzas sociales en competencia.

Esta concepción del campo jurídico significa que cada acción sociojurídica está enmarcada en tres tiempos y espacios, entre los cuales uno es dominante y, por lo tanto, provee el perfil general de la acción. La acción sociojurídica no puede ser plenamente comprendida si no se tienen en cuenta otros espacios y tiempos, presentes en forma recesiva, y si no se consideran sus articulaciones con el espacio y el tiempo dominantes. En este libro, el enfoque será el de la transnacionalización del campo jurídico, pero los vínculos con otros espacios y tiempos locales o nacionales aparecerán con claridad.

La concepción sociológica del campo jurídico presentada aquí exige un concepto de derecho suficientemente amplio y flexible para abarcar las dinámicas sociojurídicas que ocurren en marcos espaciales y temporales tan diversos. El concepto de derecho propuesto por la teoría política liberal -la ecuación entre nación, Estado y derecho- y elaborada sobre las bases del positivismo jurídico de los siglos XIX y XX, es demasiado estrecho para estos propósitos porque reconoce sólo uno de los espacios y tiempos: el nacional. Con base en la literatura de la antropología jurídica y la filosofía jurídica antipositivista de finales del siglo XIX, concibo el derecho como un cuerpo de procedimientos y estándares normativos regulados, que se considera exigible ante un juez o un tercero que imparte justicia y que contribuye a la creación y la prevención de disputas, así como a su solución mediante un discurso argumentativo acompañado de la amenaza de la fuerza.

Esta concepción del derecho está compuesta por retórica, burocracia y violencia. La retórica es una forma de comunicación y una estrategia de toma de decisiones basada en la persuasión, o en la convicción por medio de la movilización del potencial argumentativo de las secuencias y mecanismos verbales y no verbales aceptados. La burocracia es considerada aquí una forma de comunicación y una estrategia de toma de decisiones fundada en las imposiciones autoritarias, realizadas mediante la movilización del potencial demostrativo de los procedimientos regulados y los estándares normativos. Finalmente, la violencia es una forma de comunicación y una estrategia de toma de decisiones basada en la amenaza de la violencia física.



Estos componentes estructurales no son entidades fijas: varían internamente y en sus articulaciones recíprocas. Los campos jurídicos se distinguen entre sí por las diversas articulaciones que comprenden entre retórica, burocracia y violencia. Sin embargo, un campo jurídico complejo, tal como el derecho estatal moderno, puede comprender articulaciones diferentes en subcampos distintos. De hecho, la plasticidad del derecho estatal moderno es posible sobre todo gracias a la diversidad de las articulaciones estructurales que puede incluir. La diversidad de las articulaciones de los componentes estructurales permite establecer comparaciones sociológicas iluminadoras entre campos y ordenamientos jurídicos. En este sentido, distingo tres tipos principales de articulación: la covariación, la combinación geopolítica y la interpenetración estructural.

La *covariación* se refiere a la correlación entre los componentes estructurales de los diferentes campos jurídicos. El hecho de que la violencia haya crecido al mismo tiempo que la burocracia ha contribuido al oscurecimiento del carácter violento del campo jurídico estatal. Los campos jurídicos transnacionales analizados en este libro —aunque son complejos y tienen diferencias internas— parecen apuntar a configuraciones estructurales nuevas. Aunque éstas se caracterizan, en general, por bajos niveles de burocracia, en algunos casos se combinan con niveles altos de retórica y de violencia y, en otras ocasiones, con niveles altos de violencia y bajos niveles de retórica. Los bajos niveles de burocracia se explican por el hecho de que la densidad institucional desarrollada por el Estado-nación no tiene un desarrollo comparable en el nivel transnacional o interestatal. El crecimiento conjunto de la burocracia y la violencia, que hasta hace poco tiempo caracterizó el espacio y el tiempo nacionales del campo jurídico, parece entonces estar confinado a este espacio y a este tiempo.

Con base en estas afirmaciones, he formulado, a manera de hipótesis general, las siguientes relaciones: mientras más alto es el nivel de la institucionalización democrática de la producción jurídica, más pequeño es el espacio retórico del discurso jurídico, y viceversa; y mientras más poderosos son los instrumentos de violencia al servicio de la producción jurídica, más pequeño es el espacio retórico del discurso jurídico, y viceversa. En cuanto a la primera correlación, la violencia puede operar como una variable que inter-

viene en las relaciones entre burocracia y retórica, y en este caso los niveles bajos de burocracia se pueden combinar con los niveles bajos de retórica, si los niveles de violencia son altos.

La *combinación geopolítica* es una forma de articulación centrada en la distribución interna de la retórica, la burocracia y la violencia en un campo jurídico determinado. Articulaciones diferentes generan formas diferentes de dominación política. De acuerdo con el componente dominante de una articulación específica, podemos tener una dominación política basada en la adherencia voluntaria por la persuasión o la convicción, en estrategias demostrativas que llevan a imposiciones autoritarias, o, finalmente, en el ejercicio violento del poder. En campos jurídicos complejos, pueden encontrarse diversas formas de dominación que, sin embargo, deben ser evaluadas geopolíticamente en relación con las otras áreas jurídicas (como el derecho penal, el derecho laboral y el derecho del bienestar social), en las que se puede identificar un incremento de la violencia, o de la violencia y la burocracia (en detrimento de la retórica)<sup>1</sup>.

La tercera forma importante de la articulación entre la retórica, la burocracia y la violencia es la *interpenetración estructural*. Este es el tipo más complejo de articulación porque consiste en la presencia y reproducción de un cierto componente dominante dentro de uno dominado. Su complejidad radica no sólo en que implica el análisis de múltiples procesos cualitativos sino también en que es debatible inequívocamente sólo en largos períodos históricos. Las relaciones entre la cultura oral y la escrita son un ejemplo de esto. Se ha establecido que estas dos formas de producción cultural tienen características estructurales diferentes<sup>2</sup>. Por ejemplo, la cultura oral está centrada en la conservación (almacenamiento) del conocimiento, mientras que la cultura escrita está centrada en la innovación. La cultura oral está plenamente colectivizada, mientras que la cultura escrita permite la individualización. La cultura oral tiene su unidad básica en la fórmula, en tanto que la cultura escrita la tiene en la palabra.

Si miramos la historia cultural moderna a la luz de estas distinciones, se hace claro que, hasta el siglo XV, la cultura europea -y por

1. Santos, 1991.

2. Ong, 1971, 1977.



tanto la cultura jurídica europea- era predominantemente oral. Desde esa época, la cultura escrita se expandió gradualmente y la oral retrocedió. Pero es evidente que, entre el siglo XV y el siglo XVIII, la estructura de la cultura escrita tuvo que ser consolidada, y que en su operación fue permeada por la lógica interna de la cultura oral. En otras palabras, en ese entonces escribíamos como hablábamos, y creo que esto se puede detectar en los escritos jurídicos de ese tiempo. En la segunda fase, que va del siglo XVIII a las primeras décadas del presente siglo, la palabra escrita dominó nuestra cultura. Pero la radio y los medios audiovisuales masivos redescubrieron entonces el sonido del mundo y entramos en un tercer período: un período de oralidad secundaria. Sin embargo, esta reoralización de la cultura es diferente del período previo de la cultura oral, por cuanto las estructuras de la cultura escrita permean, penetran y contaminan la nueva cultura oral. En otros términos, hablamos como escribimos.

Si pensamos en el Estado moderno en este contexto, mi tesis es que la retórica no sólo se reduce cuantitativamente sino que es "contaminada" o "infiltrada" cualitativamente por la burocracia y la violencia dominantes. En mi estudio del movimiento de la justicia informal en relación con la burocracia, analicé tres tipos de argumentos que tendían a ser más persuasivos en los escenarios informales, con el fin de ver si, por ejemplo, los argumentos y los razonamientos que dependían de la lógica y el discurso burocráticos estaban siendo propuestos en escenarios no burocráticos. El propósito era encontrar, dentro de las reformas informalizadoras, el grado en que la burocracia (y posiblemente la violencia también) se estaba expandiendo dentro de la forma de la retórica<sup>3</sup>.

El concepto amplio de derecho adoptado aquí, junto con la idea de que el derecho opera en tres espacios y tiempos diferentes, implica que las sociedades modernas son, en términos sociojurídicos, formaciones o constelaciones jurídicas. En lugar de estar reguladas por un único ordenamiento jurídico, las sociedades modernas están reguladas por una pluralidad de ordenamientos jurídicos, interrelacionados y distribuidos socialmente de varias maneras. Esto pone de presente la cuestión del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico

---

3. Santos, 1991.

tiene que ver con la idea de que más de un sistema jurídico opera en una misma unidad política. La discusión de este tópico ha sido uno de los debates cruciales en la sociología y la antropología del derecho, y también, aunque en una forma diferente, en la filosofía del derecho.

La existencia de un debate central sobre el pluralismo jurídico es significativa en y por sí misma y merece ser analizada. Sin embargo, antes de intentar hacerlo, me gustaría decir que en los orígenes de este debate, probablemente no menos que en otros fundamentales en diferentes disciplinas, se encuentra un falso debate, o por lo menos uno mal formulado. Para empezar, el nombre de 'pluralismo jurídico' tiene una connotación definitivamente normativa, por cuanto cualquier cosa que sea llamada con ese nombre debe ser buena porque es pluralista o, en cualquier caso, mejor que lo que sea opuesto como no pluralista. Esta connotación puede ser una fuente de error y, por tanto, debe ser evitada. En mi opinión, no hay nada inherentemente bueno, progresista o emancipatorio acerca del "pluralismo jurídico". De hecho, hay ejemplos de pluralismo jurídico que son bastante reaccionarios. Por esta razón, prefiero hablar de una pluralidad de ordenamientos jurídicos, en lugar de pluralismo jurídico, cuando quiero referirme al tema que ha sido asociado tradicionalmente con esta última expresión.

La inadecuación del "pluralismo jurídico" puede ser rastreada hasta sus orígenes como concepto científico. Surgió durante el cambio del siglo pasado al presente en la filosofía jurídica antipositivista, como reacción contra la reducción del derecho al derecho estatal, hecha por el movimiento codificador y desarrollada por el positivismo jurídico<sup>4</sup>. Fue una reacción contra el centralismo o el exclusivismo estatal, fundada en un argumento según el cual el derecho estatal estaba, en realidad, lejos de ser exclusivo y en algunos casos incluso no era central en la ordenación normativa de la vida social. Si se mira la vida sociojurídica en las sociedades europeas de la época del movimiento codificador, se hace claro que la reducción del derecho al derecho estatal era, antes que todo, el resultado de un credo político y que la realidad empírica estaba del lado de los "pluralistas jurídicos". Sin embargo, con la consolidación y la expansión del

---

4. Ehrlich, 1936; Bobbio, 1942; Del Vecchio, 1957; Carbonnier, 1979.



Estado constitucional liberal, y con la conversión de las hipótesis jurídicas positivistas en tesis hegemónicas (de sentido común) sobre el derecho, el centralismo o exclusivismo jurídico estatal desapareció como tal y pasó a ser el derecho *tout court*. Desde entonces, los pluralistas jurídicos debieron llevar la carga de la prueba al definir el derecho como algo diferente al derecho estatal. Cuando el positivismo jurídico añadió alguna sustancia analítica a su orientación política inicial, las tesis del pluralismo jurídico se vieron mezcladas en un debate político sobre la definición del derecho.

Esta mezcla de consideraciones analíticas y políticas fue desplegada, aunque de manera silenciosa en la mayoría de los casos, cuando el pluralismo jurídico se convirtió en un debate central en la sociología y la antropología del derecho, a partir de los años sesenta<sup>5</sup>. Debido al positivismo científico que dominó estas disciplinas, se les dio predominio absoluto a las tesis analíticas del pluralismo jurídico, mientras que sus tesis políticas fueron barridas y echadas bajo la alfombra. En un giro curioso, el positivismo científico enfrentó al pluralismo jurídico mediante la neutralización de las tesis políticas de éste, en nombre de tesis alternativas que, aunque eran igualmente políticas, podían ser defendidas convincentemente como analíticas, particularmente en un contexto político en el que el positivismo jurídico se encontraba en situación de debilidad extrema, esto es, en el contexto de las sociedades coloniales y poscoloniales. El hecho de que este complejo entrelazamiento de las tesis analíticas y políticas fuera escasamente reconocido, ha oscurecido el debate hasta hoy<sup>6</sup>. El debate paradigmático del derecho moderno requiere que ese reconocimiento sea hecho plenamente y que sea concebido como una de las premisas del debate. Además, en un debate paradigmático la naturaleza política de varias tesis aparentemente analíticas será puesta en evidencia.

En mi opinión, una concepción amplia del derecho y de la idea de una pluralidad de ordenamientos jurídicos que coexisten en

5. Véase, entre otros, Nader, 1969; Hooker, 1975; Moore, 1978; Galanter, 1981; Macaulay, 1983; Fitzpatrick, 1983; Griffiths, 1986; Merry, 1988; Starr y Collier, 1989; Chiba, 1989; Benda-Beckmann, 1988, 1991; Tamanaha, 1993.

6. Véase Starr y Collier, 1989; Benda-Beckmann, 1991; Tamanaha, 1993.

formas diferentes en las sociedades contemporáneas, satisface las necesidades analíticas de una estrategia política y cultural destinada a revelar el pleno alcance de la regulación social que el derecho moderno hace posible (derecho que en otro tiempo fue reducido al derecho estatal), así como el potencial emancipatorio del derecho, una vez éste sea reconceptualizado. Esto significa que, en abstracto, no hay nada progresista en la idea de la pluralidad jurídica. Lo mismo se aplica a los diferentes componentes estructurales del derecho, particularmente a la retórica. El contenido progresista de la retórica depende de la naturaleza de la audiencia retórica, de los tipos de *topoi*, de la distribución social de los argumentos razonables, de la relación entre persuasión y convicción, de la medida en que los argumentos están infiltrados por la burocracia y la violencia, etc. Además, la concepción de una pluralidad de ordenamientos jurídicos propuesta aquí intenta contrarrestar el prejuicio romántico de gran parte del pensamiento jurídico pluralista, mediante la reconstrucción teórica del campo jurídico para evitar la igualación de todos los ordenamientos jurídicos en una unidad geopolítica, y particularmente mediante la negación de la centralidad del derecho estatal en las formaciones sociojurídicas modernas.

Se puede preguntar: ¿por qué estas formas competitivas y complementarias de ordenación social deben ser llamadas "derecho" y no "sistemas de reglas", "gobiernos privados", etc.? Puesta en estos términos, la pregunta puede ser respondida sólo mediante otra pregunta: ¿por qué no?, ¿por qué el caso del derecho debe ser diferente del de la religión, el arte o la medicina? Para tomar este último caso como ejemplo, se acepta en general que, paralelamente a la medicina oficial, profesionalizada, farmacéutica, existen en la sociedad otras formas de medicina: tradicionales, herbales, comunitarias, mágicas, no occidentales. ¿Por qué se debe restringir el nombre de medicina al primer tipo de medicina, el único reconocido como tal por el sistema nacional de salud? Claramente, aquí opera una política de la definición, y su funcionamiento debe ser totalmente revelado y considerado en sus propios términos.

A pesar de todas sus inadecuaciones y obscuridades, el del pluralismo jurídico ha sido sin duda uno de los debates centrales de la sociología del derecho y de la antropología del derecho. A mi



manera de ver, existen cuatro condiciones metateóricas para que un tema se convierta en un debate central. En primer lugar, el tema debe ser muy amplio e inherentemente flexible, de tal manera que permita incluir en él nuevas dimensiones a medida que se desarrolla el debate. En segundo lugar, el tema debe tener límites vagos, de forma tal que lo que pertenece y lo que no pertenece al debate no esté nunca muy claro. De hecho, saber lo que se está debatiendo es parte del debate. En tercer lugar, en el campo de la sociología, un tema de esa naturaleza debe permitir el vínculo macro-micro; específicamente, debe permitir una articulación fácil entre el trabajo empírico y el desarrollo teórico. En cuarto lugar, a través del tema debe ser posible abrir un debate entre discusiones centrales de otras disciplinas, de tal manera que la disciplina en cuestión pueda mantener su identidad en debates interdisciplinarios e incluso transdisciplinarios.

XIX Mi propósito no es analizar aquí en detalle la medida en que el debate sobre el pluralismo jurídico ha cumplido estas condiciones metateóricas. Me limitaré a algunas notas interpretativas exigidas por las tesis expuestas en este libro. En cuanto a la primera condición, el debate sobre el pluralismo jurídico es amplio y se ha expandido con el paso del tiempo. En una mirada panorámica reciente, Sally Merry ha distinguido dos períodos del debate: el pluralismo jurídico dentro del contexto colonial y poscolonial, de una parte, y el pluralismo jurídico en las sociedades capitalistas modernas, de la otra. El segundo período es claramente una expansión del debate del primer período<sup>7</sup>. Sostengo en este libro que estamos entrando en un tercer período, que se distingue de los precedentes en que, mientras que el debate en éstos giraba alrededor de los ordenamientos jurídicos locales, infraestatales, que coexistían dentro de un mismo espacio y un mismo tiempo nacionales, en el período actual el debate se refiere a los ordenamientos jurídicos supraestatales, transnacionales, que coexisten en el sistema mundial, tanto con el Estado como con los

7. Sally Merry, 1988. La autora limita su periodización al debate en la sociología y la antropología del derecho tal como las conocemos hoy en día. Como lo dije anteriormente, el primer contexto del debate fue la filosofía jurídica europea (y también la sociología jurídica) de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

ordenamientos jurídicos infraestatales. Este libro está dedicado a este nuevo contexto de pluralidad jurídica.

Sin embargo, la idea de la periodización del debate no significa que, en este caso, un período nuevo elimina los precedentes. En realidad, los tres períodos no son más que los tres contextos o tradiciones principales dentro de las que el debate continúa llevándose a cabo en nuestros días entre científicos sociales diferentes e incluso entre los mismos de antes. La superposición de los diversos contextos del debate sobre la pluralidad de ordenamientos jurídicos es prueba de la amplitud de la discusión que, por tanto, cumple inequívocamente la primera condición metateórica de un debate central.

En cuanto a la segunda condición -la vaguedad de los límites-, lo que dije antes acerca de la ambigüedad y la inadecuación de la expresión "pluralismo jurídico" ya cumple esta condición. Desde su surgimiento en la filosofía jurídica europea de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el debate sobre la pluralidad de ordenamientos jurídicos ha estado mezclado con la tarea de definir el derecho, tarea similar a la de Sísifo. Y mientras que en el primer período del debate era relativamente fácil (aunque no tan fácil como se creyó durante algún tiempo) distinguir los diferentes ordenamientos jurídicos presentes -el derecho colonial, de un lado, y el derecho indígena, del otro-, en el segundo período esa distinción se volvió mucho más problemática, y aún más en el tercer período en el que estamos entrando.

Sin embargo, en este último período la vaguedad de los límites del debate tiene que ver menos con la cuestión de la definición adecuada del derecho -que tiende a ser considerada estéril- que con la identificación de los tres espacios y tiempos del campo jurídico -el local, el nacional y el transnacional-, y de las complejas relaciones entre ellos. Algunas de las difíciles exigencias analíticas que están en juego aquí son desarrolladas en este libro.

Las dos últimas condiciones metateóricas -el potencial para los vínculos macro-micro y el potencial para el trabajo interdisciplinario- están relacionadas estrechamente y han sido cumplidas sólo de manera parcial en el debate sobre la pluralidad de los ordenamientos jurídicos hasta ahora. El hecho de que este debate desafíe la teoría política liberal -aunque sigue estando abierta la pregunta sobre la



radicalidad de este desafío- no ha recibido el reconocimiento debido. En consecuencia, no ha sido explorada su interconexión "casi obvia" con temas tales como la legitimación estatal; las formas sociales de poder; las personalidades jurídicas; las desigualdades socioeconómicas, raciales, culturales y de género; los modelos de democracia; y la política de derechos. Por el contrario, se ha hecho un trabajo académico limitado sobre el pluralismo jurídico, que ha reproducido el aislacionismo (e incluso la marginalidad) de las disciplinas, tanto de la sociología del derecho como de la antropología del derecho.

En las raíces de ese aislacionismo se encuentra el hecho de que ambas disciplinas han tendido, en general, a tomar al Estado como una entidad dada -es decir, no problemática- y a estudiar el derecho, por tanto, como fenómeno social antes que como fenómeno político. De hecho, la llamada autonomía del derecho, tan preciada en la teoría jurídica, fue posible gracias a la conversión del Estado en una "estructura ausente". Este tipo de conceptualización ha sido complementada con frecuencia por una postura activa antiestatal que es bastante visible en buena parte del trabajo académico del pluralismo jurídico. En los capítulos siguientes, explico hasta qué punto el Estado-nación ha sido desafiado en forma reciente como unidad privilegiada de iniciativa política, y ha sido doblemente descentrado por el surgimiento de procesos políticos infraestatales y supraestatales poderosos. Sin embargo, el análisis de este desafío del centrismo del Estado no se inspirará en ninguna postura antiestatal romántica o pseudorradical. El Estado-nación y el sistema interestatal son formas políticas centrales del sistema mundial capitalista y probablemente lo seguirán siendo durante el futuro predecible. No obstante, lo que ha pasado es que ellos se han convertido en un campo inherentemente disputado, y este es el nuevo hecho crucial sobre el que se debe concentrar el análisis: el Estado y el sistema interestatal como campos jurídicos complejos en los que interactúan, se funden y colisionan las relaciones estatales y no estatales, locales y transnacionales, en combinaciones dinámicas e incluso volátiles. Estos temas son tratados en detalle a lo largo de este libro.

El Estado y el sistema interestatal ofrecen, así, uno de los contextos más amplios dentro de los que puede desarrollarse fructíferamente el debate sobre la pluralidad de los ordenamientos jurídicos.

cos. En relación con el Estado, la estrategia analítica significa "hacer retornar al Estado", pero, en cierto sentido, se hace retornar al Estado a un "lugar" donde nunca ha estado antes. Bajo las circunstancias actuales, la centralidad del Estado radica en gran medida en la manera en que éste organiza su propio descentramiento, como lo muestran las políticas patrocinadas por el Estado que buscan el regreso a la comunidad o la revitalización de ésta.

Además del descentramiento del Estado en la vida social, existe una tendencia concurrente hacia una heterogeneidad interna aún mayor de la acción estatal. No sólo se trata de que diferentes sectores de la actividad estatal se estén desarrollando con ritmos diferentes y en ocasiones en direcciones opuestas, sino también de que hay disyuntivas e inconsistencias en la acción estatal, y esto llega hasta un punto tal que no se puede distinguir ningún patrón coherente de acción estatal. Esto es evidente en particular en los estados periféricos y semiperiféricos, pero también se puede observar en los estados centrales. El descentramiento de ciertas áreas puede, entonces, coexistir con el recentramiento de la acción estatal en otras. Por ejemplo, la degradación de los servicios suministrados por el Estado (vivienda, salud, seguridad social) puede coexistir con la expansión de los servicios simbólicos ofrecidos por el Estado (el nacionalismo estatal, la política como espectáculo, el Estado como el centro imaginario coherente y cohesivo de sociabilidad en las sociedades crecientemente fragmentadas por las desigualdades y por las ideologías y prácticas inspiradas en el odio hacia razas, etnias, géneros y generaciones).

De manera similar, la muerte del bienestar social proveído por el Estado y de las redes de seguridad (*safety nets*) en favor del ciudadano, puede coexistir con la expansión del bienestar social estatal y las redes de seguridad en favor de las empresas y el capital transnacional. Estamos siendo testigos tanto de un descentramiento del Estado como de la explosión de la unidad de la acción estatal y de su derecho, y del surgimiento consecuente de diferentes modos de juridicidad, cada uno de los cuales está anclado políticamente en un microestado. Como resultado de esto, el Estado mismo se convierte en una configuración de microestados y da lugar a toda una gama de nuevas preguntas que están lejos de estar respondidas por la sociología política: ¿cuál es la lógica detrás de la heterogeneización



de la acción estatal?, ¿el Estado es un campo de inercia política?, ¿qué mantiene unida a la configuración de microestados?, ¿existe una mano invisible, similar a la que solía mantener unido el mercado, o es esa mano totalmente visible?

Como consecuencia de esas heterogeneidades múltiples y omnipresentes de la acción estatal, el debate sobre la pluralidad de ordenamientos jurídicos puede extenderse a contextos novedosos e insospechados. Por ejemplo, a medida que la heterogeneidad de la acción estatal se traduce en los particularismos crecientes de la legalidad estatal, y a medida que la unidad y la universalidad del sistema jurídico oficial se derrumba, pueden surgir nuevas formas de pluralismo jurídico dentro del Estado, que podríamos llamar pluralismo jurídico interno. Por supuesto, no toda forma de heterogeneidad estatal contendrá una situación de pluralismo jurídico interno. Este último requiere la coexistencia de lógicas diferentes de regulación seguidas por distintas instituciones estatales que se comunican muy poco entre ellas. Además, esas lógicas de regulación pueden variar de país a país, incluso cuando son desarrolladas por el mismo tipo de legislación, y varían también a lo largo del tiempo y del espacio. Para dar sólo un ejemplo, en los países centrales, particularmente aquellos con un componente fuerte de bienestar social suministrado por el Estado, el derecho laboral, al igual que la legislación social, ha sido "localizado" en el lado promocional o facilitador de la acción estatal (en especial durante el período del capitalismo fordista), mientras que el derecho penal y la legislación restrictiva, que comprende desde las leyes sobre inmigración y refugiados hasta las leyes sobre *Berufsverbot* (restricciones impuestas sólo a los comunistas o a los miembros de grupos de extrema izquierda) han sido localizados en el lado represivo de la acción estatal. Sin embargo, en la legislación colonial el derecho laboral y el derecho penal casi se sobreponían y, de hecho, el primero fue en algunos casos la forma principal de penalización del pueblo colonizado<sup>8</sup>.

"Dislocaciones" similares, que exigen teorización innovadora, pueden tener lugar dentro de los tres espacios y tiempos principales que han ofrecido el marco para el debate sobre la pluralidad de

8. Lacan, 1977, pp. 2-4.

ordenamientos jurídicos. En situaciones de integración interestatal regional en las que existe un *pool* de soberanías, como en la Unión Europea, el espacio y el tiempo nacionales, que eran antes el espacio y el tiempo de la acción estatal, pueden ser gradualmente recodificados como local o infraestatal y, cuando son vistos desde el espacio y el tiempo transnacional hegemónico -desde Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo- pueden asumir características que están asociadas generalmente con el espacio y el tiempo locales, tales como el particularismo, el regionalismo o la clausura a los discursos y prácticas del pueblo.

En los capítulos siguientes muestro que el Estado, de hecho, ofrece una de las dimensiones del contexto más amplio en el que debe ser debatida la pluralidad de ordenamientos jurídicos. Pero, como dije antes, los estados modernos existen en un sistema interestatal que es la configuración política hegemónica del sistema mundial capitalista y de la economía mundial. Al final de este siglo, el sistema interestatal está sufriendo cambios dramáticos, en especial notorios en la región europea del sistema mundial, como consecuencia de la muerte de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental. De manera más general, la fuerte intensificación de las prácticas transnacionales durante las últimas dos décadas ha producido transformaciones en las estructuras y las prácticas estatales que, aunque pueden variar de acuerdo con la ubicación del Estado dentro del sistema mundial -centro, semiperiferia o periferia-, son en todo caso decisivas. Al contrario de lo que sucedió en tiempos pasados, la fuerza directriz detrás de la transformación del Estado y de su legalidad es la intensificación de las prácticas transnacionales y las interacciones globales. Bajo esas presiones, las funciones reguladoras del Estado-nación pasan a ser derivadas, es decir, pasan a depender de los imperativos de la globalización de la economía tal como son formulados por las organizaciones internacionales (el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, etc.) o por las propias empresas multinacionales de los estados hegemónicos, en defensa de los intereses de éstas, sobre todo de las norteamericanas. Un ejemplo de esta situación se encuentra en la presión de los Estados Unidos en favor de la adopción de nuevas leyes sobre patentes a nivel global. En esta circunstancia, la regulación estatal,



sobre todo en la periferia y la semiperiferia del sistema mundial, se convierte en una especie de subcontratación o franquicia política.

Aun si se asume que este es el fenómeno universal, hay que tener en cuenta que toma formas diferentes en el centro, en la periferia y en la semiperiferia del sistema mundial. La posición del Estado en el sistema mundial afecta el papel de éste en la regulación social, así como su relación con el mercado y con la sociedad civil, fenómenos que la teoría del sistema mundial ha discutido en términos de la fuerza relativa, tanto interna como externa, del Estado. Las consecuencias de esto en la producción del derecho al interior de cada territorio estatal no son automáticas, pero en verdad son decisivas. La pregunta que debe ser respondida tiene que ver no sólo con la medida en que se demuestra que la hipótesis del monopolio jurídico estatal es falsa, sino también con el grado de isomorfismo entre el derecho producido por el Estado y el que no es producido por éste. La diversidad de los fenómenos observados exige un esfuerzo comparativo a escala global. Además, la perspectiva del sistema mundial no se limita a enfatizar la ubicación estructural. También subraya la historicidad y la temporalidad. En los siguientes capítulos presento un marco comparativo multidimensional diseñado para dar cuenta de la diferenciación histórica entre varias formas de transnacionalización jurídica que están ocurriendo simultáneamente en el sistema mundial.

Además del Estado y del sistema mundial, se debe mencionar otro contexto amplio para el debate sobre la pluralidad de los ordenamientos jurídicos: el significado político de la pluralidad jurídica en las condiciones históricas específicas en las que ésta ocurre. Después del colapso de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental, de las transiciones democráticas en Latinoamérica, de los casos de regímenes revolucionarios retirados del poder por el voto ciudadano en elecciones democráticas (como en Nicaragua y en las Islas de Cabo Verde), del fin del *apartheid* en Suráfrica, de la conversión de poderosos movimientos guerrilleros en partidos parlamentarios (como el M-19 en Colombia), de las negociaciones de paz en Angola (a pesar de la pobreza de sus resultados hasta ahora), El Salvador, Mozambique y el Medio Oriente, la democracia asume, al final del siglo, una legitimidad en apariencia indiscutida, un hecho que contrasta fuertemente con los otros conceptos de transformación

política cultivados por la modernidad, tales como la revolución, la reforma o el socialismo.

Sin embargo, en aparente contradicción con todo esto, mientras menos discutido es el valor político de la democracia, más problemática es su identidad. ¿Existe un concepto unitario de democracia?, ¿es posible explicar mediante una teoría general todos los diversos procesos que pueden ser identificados a lo largo del sistema mundial como procesos de democratización?, ¿es la democracia un mecanismo "oeste-céntrico" de regulación social, o un instrumento potencialmente universal de emancipación social?, ¿existe alguna relación entre la aparente tendencia universal hacia la democracia, de un lado, y la transnacionalización del credo del liberalismo económico, del otro?, ¿hasta qué punto está articulada la tendencia democrática con otras tendencias de signo opuesto (la desigualdad social creciente entre el Norte y el Sur, y al interior de los países del Norte y el Sur; el autoritarismo creciente sobre la vida privada)?, ¿cómo puede la democracia ser tan indiscutida cuando casi todos sus conceptos satélites son cada vez más problemáticos, ya se trate de la representación, la participación, la ciudadanía, la obligación política o la legalidad?

Estas preguntas y muchas otras que pueden formularse son indicativas del gran esfuerzo teórico que está por hacerse. En mi opinión, la aclaración de la relación entre el derecho y la democracia es particularmente importante y en ella la discusión sobre la pluralidad jurídica puede ser muy iluminadora. Una concepción de los campos sociojurídicos que operan en espacios y tiempos conformados por estratos múltiples puede expandir el concepto de derecho y, en consecuencia, el concepto de política. Estará entonces en capacidad de develar las relaciones de poder más allá de los límites convencionales establecidos por la teoría liberal convencional y, por esta razón, podrá develar fuentes insospechadas de opresión o de emancipación que operen a través del derecho. Al hacerlo, alargará el campo y radicalizará el contenido del proceso de democratización.

La democratización es todo proceso social que consiste en la transformación de las relaciones de poder en relaciones de autoridad compartida. A la luz de esta definición, la idea de la pluralidad jurídica no tiene un contenido político fijo. Puede ser útil tanto para una política progresista como para una política reaccionaria. La



misma situación de la pluralidad jurídica puede “evolucionar” de un tipo de política al otro, sin que haya un cambio significativo en las condiciones estructurales o institucionales que la hacen posible. Esa situación comprende, tanto como el Estado mismo, relaciones sociales que cambian con el tiempo. El valor despótico o democrático de los ordenamientos jurídicos específicos varía mucho en la configuración jurídica de una sociedad determinada. Esa variación puede estar relacionada en diversas formas con la posición del país en el sistema mundial y con la historicidad específica de la construcción o transformación del Estado.

A la luz de todo esto, no existe una razón intrínseca por la que el derecho estatal sea menos despótico o menos democrático que el derecho no estatal. Existen, por supuesto, muchos ordenamientos jurídicos no estatales que son más despóticos que el ordenamiento jurídico estatal del país en el que operan (por ejemplo, el derecho de la mafia). Creo que en los estados centrales, en especial en los que tienen un Estado de bienestar fuerte, el ordenamiento jurídico estatal quizá es menos despótico que muchos ordenamientos jurídicos no estatales que existen en esas sociedades. La extremada variedad de situaciones en las sociedades periféricas y semiperiféricas nos debe poner en guardia contra la formulación de una hipótesis inversa en relación con estas sociedades.

En los casos en que el derecho estatal puede ser considerado más democrático que el derecho no estatal, la importancia de la concepción de la pluralidad jurídica descansa en su relativización del contenido democrático dentro de una configuración jurídica más amplia. En otras palabras, el contenido democrático del derecho estatal puede estar basado en la coexistencia con ordenamientos jurídicos no estatales despóticos, con los cuales interactúa y se conjuga en formas diversas. Aunque hacen parte de la configuración jurídica, esos ordenamientos no estatales no son reconocidos como derecho por la teoría liberal hegemónica del Estado y del derecho. De esta forma, se evita que su despotismo eclipse y relativice la naturaleza democrática de la única legalidad oficialmente reconocida: el derecho estatal. Al denunciar esta ocultación ideológica, la pluralidad jurídica puede revelar algunas caras ocultas de la opresión; al mismo tiempo, puede abrir nuevos campos para la acción emancipatoria.